

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, nueve (9) de abril de dos mil veintiuno (2021)

SENTENCIA

Magistrada Ponente: María Eugenia Gómez Velásquez

Proceso : Ordinario de Segunda Instancia
Demandante : **FERNANDO EMILIO GIRALDO ARBOLEDA**
Demandada : **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-**
Radicado : **05001-31-05-018-2016-00395-01**
Providencia : Sentencia
Temas y Subtemas : Seguridad Social –Pensión de jubilación Ley 71 de 1988, intereses moratorios y costas-
Decisión : Modifica decisión condenatoria
Sentencia N° : 086

En la fecha antes anotada el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por los Magistrados **CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**, como ponente, profieren la siguiente decisión de fondo, previa deliberación, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 806 del 4 de junio de 2020, *“Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”*, que modificó el trámite en los procesos de la jurisdicción Laboral.

ANTECEDENTES

Pretensiones:

Se solicita condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- a reconocer pensión de jubilación en aplicación de la Ley 71 de 1988, concordado con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a partir del 1° de septiembre de 2008, teniendo en cuenta las semanas laboradas al servicio del sector público sin aportes a las cajas de previsión y las semanas al servicio del sector privado cotizadas al ISS; pago de intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y Costas del proceso.

Hechos Relevantes de la Demanda:

Afirma el apoderado de la parte demandante, que el señor Fernando Emilio Giraldo Arboleda cumplió los 60 años de edad el 11 de marzo de 2011, siendo beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en vista de lo cual solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez, la cual le fue negada por la UGPP argumentando que no cumplía con el requisito de semanas.

Indica que su mandante acredita un total de 1170 semanas cotizadas tanto en el sector público como en el privado, procediendo el reconocimiento de la pensión de vejez de la Ley 71 de 1988, toda vez que ha aportado por más de 20 años tanto en el sector público como en el privado y acredita el requisito de edad ya que tiene más de 60 años.

Respuesta de la Parte Demandada:

Efectuadas las diligencias de notificación y traslado de la demanda, la **Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-**, dio respuesta a través de apoderada judicial¹, aceptando los hechos relativos a la edad del demandante, su calidad de beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la solicitud y posterior negativa de reconocimiento de la pensión de vejez. Respecto a los demás hechos indica que no le constan.

Se opuso a las pretensiones de la demanda y para su defensa formuló las excepciones de mérito que denominó: ausencia de vicios en el acto administrativo demandado; inexistencia de la obligación y prescripción.

Integración del contradictorio:

El Juzgado de Primera Instancia ordenó de oficio integrar el contradictorio con la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, como litis consorte necesario por pasiva², la cual una vez notificada dio respuesta a la demanda³, aceptando los hechos relativos a la edad del demandante, su calidad de beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la solicitud y posterior negativa de reconocimiento de la pensión de vejez. Respecto a los demás hechos indica que no le constan y solicita la prueba de los mismos.

Se opuso a las pretensiones de la demanda y para su defensa formuló las excepciones de mérito que denominó: falta de legitimación en la causa por

¹ Folios 61 a 63.

² Folio 70.

³ Folios 72 a 75.

pasiva; inexistencia de la obligación del reconocimiento y pago de la pensión de vejez por falta de los requisitos legales; inexistencia de retroactivo pensional; improcedencia de intereses moratorios e indexación; imposibilidad de condena en Costas; buena fe; compensación y prescripción.

Sentencia de Primera Instancia:

El Juzgado Décimo Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, mediante Sentencia condenó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- a reconocer al señor Fernando Emilio Giraldo Arboleda, la pensión de vejez en calidad de beneficiario del régimen de transición, en aplicación de la Ley 71 de 1988; al pago de la suma de \$246.339.839,00,00 por concepto de mesadas causadas en pensión, entre el 28 de octubre de 2011 y el 31 de diciembre de 2018; a partir del primero (1°) de enero de 2019, la entidad demandada deberá continuar reconociendo y pagando al demandante, una mesada equivalente a \$3.100.034,61 y con derecho a una mesada adicional. Condenó al pago de intereses moratorios a partir del 1° de marzo de 2015. Declaró probada de manera parcial la excepción de prescripción y de oficio declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación respecto de Colpensiones, absolviéndola de todas las pretensiones formuladas por la parte demandante. Condenó en Costas a cargo de la UGPP, fijando las agencias en derecho en la suma de \$25.462.099,00.

Recurso de Apelación:

Inconforme con la decisión anterior, la apoderada de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales

de la Protección Social -UGPP-, formuló recurso de Apelación, indicando que el demandante no cumple con el requisito de haber presentado sus servicios por 20 años continuos o discontinuos, como lo establece la Ley 71 de 1988, ya que laboró sólo 508 semanas y por tanto no hay lugar a reconocer la pensión de vejez; que además de lo anterior, al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 el 1° de abril del año 1994, no incluyó esta pensión por haber llegado el funcionario a la edad de 65 años, sólo la de vejez asimilándola a la de jubilación y se establece la pensión bajo dos condiciones: la edad y el tiempo cotizado, condición esta última que no cumple el demandante.

Solicita se revoque la condena al pago de intereses moratorios y las Costas procesales y se absuelva a la entidad demandada de todas las pretensiones formuladas en la demanda.

Alegatos de Conclusión:

La apoderada de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, solicita se absuelva a su mandante de todas las pretensiones de la demanda indicando que el demandante es beneficiario del régimen de transición, siendo la normatividad vigente a la fecha de entrada en vigor el sistema la Ley 71 de 1988, reglamentada por el Decreto 2709 de 1994, que era la única que permitía computar tiempos entre el sector privado y oficial; pero que no obstante lo anterior, a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, no incluyó esta pensión de vejez por el retiro del funcionario en razón de haber llegado a la edad de 65 años (retiro forzoso), sólo estableció la pensión de vejez asimilándola a la jubilación que se otorga previo el cumplimiento de la edad y el tiempo de semanas cotizadas, condición ésta que no cumple el interesado, ya que los tiempos servidos

debidamente acreditados no suman los 20 años requeridos, razón por la cual no es posible reconocer la pensión solicitada.

En cuanto a la condena en costas sostiene que el proceso se tramitó y transcurrió sin haberse presentado circunstancias anormales o demoras imputables a su representada y el objeto de la pretensión no revistió complejidad especial, toda vez que la prueba con base en la cual fue proferida la Sentencia fue adosada al expediente sin dificultades.

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos y sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de Apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con lo resuelto de más; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984 y los artículos 15 y 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Así mismo se conocerá en Consulta en favor de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, conforme a lo establecido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y Providencias de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia STL-7382 del 9 de junio de 2015, Radicado 40200 y AL469 del 3 de febrero de 2016, Radicado 71896, de las cuales fue Magistrada Ponente la doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo.

Conflicto jurídico:

El conflicto jurídico a dirimir, radica en analizar si el demandante cumple con el requisito de tiempo de servicio para tener derecho al reconocimiento de la denominada pensión por aportes consagrada en la Ley 71 de 1988 y si procede la condena a intereses moratorios y de las costas del proceso. Se conocerá en Consulta en favor de la entidad demandada con respecto a la legalidad y cuantificación de las condenas impuestas en su contra y que no fueron objeto de apelación.

Encontrando esta Magistratura **procedente modificar la Sentencia de Primera Instancia**; por las siguientes razones:

1° Pensión de vejez Ley 71 de 1988:

Frente a las inconformidades de la recurrente, en cuanto a que el demandante no cumple con el requisito de haber presentado sus servicios por 20 años continuos o discontinuos, encuentra esta Sala de Decisión Laboral que no le asiste razón a su inconformidad, ya que como lo concluyó la *a quo* el demandante cumplió con los requisitos exigidos por la Ley 71 de 1988, como lo era haber llegado a los 60 años de edad y tener acreditados con los documentos presentados con la demanda, más de 20 años de servicios entre servidos y cotizados, alcanzando un total de 1.093 semanas; veamos:

El artículo 7° de la Ley 71 de 1988, establece que los empleados oficiales y trabajadores que acrediten 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, del orden Nacional, Departamental, Municipal, Intendencial, Comisarial o Distrital y en el ISS –hoy Colpensiones-,

tendrán derecho a una pensión de jubilación a los 60 años de edad, en el caso de los hombres⁴.

La norma anterior fue reglamentada por el **artículo 5° del Decreto 2709 de 1994**, preceptuando que **no se computará como tiempo para adquirir el derecho a la pensión de jubilación por aportes**, el laborado en empresas privadas no afiliadas al ISS para los riesgos de IVM, ni **el laborado en entidades oficiales de todos los órdenes cuyos empleados no aportaran al sistema de seguridad social que los protege**; sin embargo esta norma fue declarada nula por el por el H. Consejo de Estado, en Sentencia proferida el 28 de febrero de 2013, expediente 11001-03-25-000-2008-00133- 00 (2793-08).

Y en atención a lo anterior, **la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia desde Sentencia SL 4457 del 26 de marzo de 2014 Radicado 43904, cambió la posición imperante hasta ese momento**, en la que se exigía para el reconocimiento de la pensión establecida en la Ley 71 de 1988, que el tiempo laborado en entidades oficiales, debían realizarse aportes a entidades de previsión o de seguridad social y en su lugar se precisó: *“...que para efectos de la pensión de jubilación por aportes que deba aplicarse en virtud del régimen de transición pensional establecido en el art 36 de la Ley 100 de 1993, se debe tener en cuenta el tiempo laborado en entidades oficiales, sin importar si fue o no objeto de aportes a entidades de previsión o de seguridad social...”*; tesis reiterada en Sentencias SL 770 del 13 de marzo de 2019, Radicado 55552; SL 13671 del 7 de septiembre de 2016 Radicado 50411 y la SL 8302 del 7 de junio de 2017 Radicado 65794, entre otras.

⁴ Artículo 7. *A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer...* (Negrillas fuera del texto)

De acuerdo a la anterior jurisprudencia, no le asiste razón a la entidad demandada cuando aduce en la Resolución RDP 044310 de 2015⁵, que desestima los tiempos prestados al Departamento de Antioquia y de Ferrocarriles Nacionales por cuanto no se efectuaron descuentos para seguridad social.

Para efectos de demostrar los tiempos de servicio, se allegó con la demanda certificados de información laboral, de salarios mes a mes y de salario base⁶, respecto de los cuales no se formuló tacha u oposición alguna por la entidad demandada -recuérdese que de conformidad con lo consagrado en el párrafo del artículo 54 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social “...los documentos o sus reproducciones simples presentados por las partes con fines probatorios se reputarán auténticos, sin necesidad de autenticación ni presentación personal⁷”; constatándose que el señor Fernando Emilio Giraldo Arboleda, prestó sus servicios en el Ministerio de Educación Nacional, entre el 3 de marzo de 1969 y el 31 de marzo de 1978, que corresponden a 2651 días, esto es, 378,71 semanas; en el Departamento de Antioquia del 14 de marzo de 1958 al 7 de diciembre de 1962, que equivalen a 1698 días, esto es, 242,57 semanas; en el Fondo de Pasivo Pensional de Ferrocarriles Nacionales laboró entre el 9 de diciembre de 1962 y el 2 de marzo de 1969, que equivalen a 2169 días, esto es, 309,85 semanas y de la historia laboral de Colpensiones⁸ se constata que el actor cotizó a dicha entidad 150 semanas, que sumadas a los tiempos de servicios, totaliza 1081,13 semanas, con lo que el demandante cumple con el requisito de semanas de cotización, ya que requería acreditar 20 años de servicio, que equivalen a 1028,57 tal como lo precisó la Sala de Casación Laboral, de la H. Corte Suprema de Justicia, entre otras, en las Sentencias SL 032 del 24 de enero de 2018, Radicado 57571 y la SL 3652 del 23 de agosto de 2018, Radicado 53573.

⁵ Folios 19 a 21.

⁶ Folios 6 a 17.

⁷ “PAR.—En todos los procesos, salvo cuando se pretenda hacer valer como título ejecutivo, los documentos o sus reproducciones simples presentados por las partes con fines probatorios se reputarán auténticos, sin necesidad de autenticación ni presentación personal, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con los documentos emanados de terceros.””

En cuanto a la edad, tenemos que el señor Fernando Emilio Giraldo Arboleda nació el 11 de marzo de 1941, tal como se acepta por la entidad demanda en las Resoluciones RDP 009679 y 044310 de 2015⁹, cumpliendo los 60 años de edad el mismo día y mes del año 2001; anotándose que es beneficiario del régimen de transición pensional por cuanto tenía más de 40 años a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y sin perderlo con la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, que estableció en el parágrafo cuarto del artículo 1°, que el mismo, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010 a excepción de los trabajadores que siendo beneficiarios de dicho régimen, tengan cotizadas por lo menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo, a quienes se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014 y en el presente caso, el demandante al 29 de julio de 2005, contaba con 940 semanas.

Así las cosas, **se confirmará la Sentencia de Primera Instancia en cuanto condenó al reconocimiento de la pensión de vejez en aplicación del régimen de transición concordado con la Ley 71 de 1988 y con derecho a trece (13) mesadas; confirmándose en Consulta la decisión, en cuanto a la fecha de disfrute de la pensión, esto es, 28 de octubre de 2011**, pues si bien se realizó la última cotización en el mes de agosto de 2008¹⁰, **operó el fenómeno jurídico de la prescripción**, consagrado en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; al haberse efectuado la reclamación de la pensión el 28 de octubre del año 2014, tal como se constata en la Resolución RDP 009679 del 12 de marzo de 2015¹¹, **prescribiendo las mesadas causadas con anterioridad al 28 de octubre del año 2011.**

-Valor mesada pensional y retroactivo:

⁸ Folios 84 a 86.

⁹ Folios 19 a 21 y 96 a 97.

¹⁰ Folio 85.

¹¹ folios 96 a 97.

Efectuada por esta Magistratura la liquidación del IBL para el año 2008, arroja un valor de \$2.669.801,98, al que aplicado una tasa de reemplazo del 75% da una mesada de \$2.002.351,00; inferior a la obtenida por el despacho de Primera Instancia, que lo fue de \$2.009.344,00 y según se observa en la liquidación aportada¹², ello obedece a que se toma el índice base de cotización -IBC- o salarios, desde el mes de julio de 2007 hacia atrás, cuando debió ser desde el mes de agosto de 2008.

Así las cosas, se modificará la decisión de Primera Instancia, en cuanto al valor del retroactivo, el cual queda en la suma de \$245.709.464,00, que corresponde al período comprendido entre el 28 de octubre de 2011 y el 31 de diciembre de 2018; así mismo a partir del 1° de enero de 2019, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- deberá seguir reconociendo una mesada pensional en cuantía equivalente a \$3.089.046,00.

3° Intereses moratorios:

Solicita la apoderada de la parte demandante se revoque la Sentencia, en cuanto condenó al reconocimiento y pago de intereses moratorios; encontrando esta Sala de Decisión Laboral que no está llamado a prosperar lo pretendido, ya no formula fundamento alguno para ello y tal como lo argumentó la *a quo*, no se evidencia una justificación legal o jurisprudencial de la entidad demandada para negar el reconocimiento de la pensión de vejez, por cuanto para el 28 de octubre de 2014, fecha en que se solicitó la pensión, ya había sido declarado nulo el artículo 5° de la Ley 71 de 1988, por el H. Consejo de Estado, en Sentencia proferida el 28 de febrero de 2013, así como también había cambiado el criterio la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, desde la Sentencia SL4457 del

¹² Folios 106 a 112.

26 de marzo de 2014 Radicado 43904; presentándose por tanto un retardo injustificado para el otorgar la prestación pensional solicitada.

Además de lo anterior, encuentra esta Sala de Decisión Laboral que la H. Corte Constitucional desde la Sentencia de C-601 de 2000, mediante la cual se analizó la Constitucionalidad del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, precisó que hay lugar a los intereses moratorios ***“sin importar bajo la vigencia de qué normatividad se le reconoce su condición de pensionado, tendrá derecho al pago de su mesada y sobre el importe de ella la tasa máxima del interés moratorio vigente. Es decir, la disposición acusada no distingue entre pensionados, pues, sólo alude al momento en el cual se produce la mora para efectos de su cálculo. ...”*** (Negrillas fuera del texto). Y agregó: ***“la Corte debe advertir que los pensionados siempre han tenido derecho al pago de intereses de mora cuando las mesadas correspondientes les han sido canceladas de manera atrasada; por lo tanto, el derecho al reconocimiento y pago de los intereses de mora a los que hace referencia la norma en comento, es un derecho de todos los pensionados, sin importar el momento en el cual se haya reconocido el derecho al disfrute de la pensión respectiva”*** (Negrillas fuera del texto).

La posición anterior fue reiterada por la Alta Corporación, en las Sentencias SU 065 de 2018 y SU 230 del 29 de abril de 2015, precisándose en la primera que ***“las entidades encargadas del reconocimiento de prestaciones propias del sistema de seguridad social están obligadas a reconocer el pago de intereses por mora a los pensionados a quienes se les ha reconocido su derecho prestacional en virtud de un mandato legal, convencional o particular. Inclusive, ello sucede con independencia de que su derecho haya sido reconocido con fundamento en la Ley 100 de 1993 o una ley o régimen anterior, por lo que la moratoria se causa por el solo hecho de la cancelación tardía de las mesadas pensionales, en aplicación del artículo 53 Superior.”*** (Negrillas fuera del texto).

Por su parte, la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, si bien es cierto desde la Sentencia del 28 noviembre del año 2002, Radicado 18273, era del criterio que no había lugar a intereses moratorios

respecto de pensiones reconocidas en aplicación del régimen de transición, por no estar al amparo integral de la Ley 100 de 1993¹³, cambió su posición a partir de la Sentencia SL 1681 del 3 de junio de 2020, Radicado 75127; precisando entre otras cosas que “...**las pensiones obtenidas después de la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, sea en virtud del régimen de transición o según las reglas de la pensión ordinaria de vejez, se entienden incluidas en este sistema, con todo lo que ello implica en materia** de convalidación de tiempos, instrumentos de financiación (cálculos actuariales, los bonos pensionales o las cuotas partes pensionales), topes pensionales, reajustes, ingreso base de liquidación, **causación de intereses moratorios, entre otras materias.**” (Negrillas fuera del texto).

Así las cosas, de acuerdo a lo expuesto, se confirmará la decisión de Primera Instancia en cuanto condenó al reconocimiento de intereses moratorios; confirmándose igualmente en cuanto a que los mismo proceden a partir del primero de marzo de 2015, esto este, pasados cuatro (4) meses luego de solicitado el reconocimiento de la pensión.

4° Condena en Costas:

Solicita la apoderada de la entidad demandada, sin argumento alguno, no se condene en Costas no está llamada a prosperar la inconformidad del recurrente, ya que de conformidad con lo establecido en el artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable en materia laboral en virtud de la analogía establecida en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, “se condenará en costas a la parte vencida en el proceso., o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica...” y la parte vencida en este proceso fue la entidad demandada.

¹³ Al respecto ver las Sentencias SL 1017 del 25 de enero de 2017, Radicado 53059; SL 6400 del 27 de abril de 2016, Radicado 42776 y la SL 4523 del 15 de abril de 2015, Radicado 49533, entre muchas otras.

Para esta Corporación, la condena en Costas se refiere a una erogación económica que le corresponde efectuar a la parte vencida en juicio por la prosperidad de las excepciones en su contra, ya que la demandante debió costear las diligencias procesales con su patrimonio y el comportamiento de las partes se tiene en cuenta es a la hora de liquidar las mismas, no de imponerlas, razón por la cual, se mantendrá la condena en costas en la Primera Instancia.

Sobre el tema que nos ocupa, **la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en Sentencias del 22 de enero de 2013, Radicado 40993**, explicó los alcances del Nral. 1° del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil -hoy artículo 365 del Código General del Proceso-, precisando que esta disposición *“...contiene un criterio objetivo, dado que no condiciona su imposición a circunstancia distinta a la pérdida del proceso o uno de los recursos a que se refiere, de allí que el actuar de buena fe no constituye razón de exoneración de la obligación que tiene la parte vencida de pagar los gastos generados con ocasión del proceso. ...”*:

Mas recientemente, la Alta Corporación en las Sentencias **SL 2946 del 31 de julio de 2019, Radicado: 73037 y SL 2087 del 12 de junio de 2019, Radicado: 63722**, indicó que la condena en costas, debe ser dispuesta por el juzgador siempre que exista una parte vencida en el proceso. Y en la SL 3294 del 30 de julio de 2019, Radicado: 66509, se precisó:

*“..conforme lo ha decantado la Jurisprudencia de la Sala, que la normativa adjetiva aplicable, según el artículo 145 del CPTSS, esto es, el artículo 365 del CGP en otrora el artículo 392 del CPC, **no supedita su reconocimiento a una actuación subjetiva, sino exclusivamente a las resultas del proceso, gravando a la parte que no sacó adelante las pretensiones o, como en este caso, las excepciones.**”* (Negritas fuera del texto).

Lo anterior advirtiéndose, que una cosa es la condena en costas y otra la liquidación de las agencias en derecho, en donde han de tenerse en cuenta la

naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, **siendo la oportunidad procesal para controvertir el valor de las agencias en derecho**, conforme al procedimiento especial de discusión establecido en el numeral 5° del artículo 366 del Código General del Proceso, **mediante los Recursos de Reposición y Apelación contra el Auto que aprueba la liquidación de Costas.**

Así las cosas, se confirmará la decisión en cuanto condenó a la entidad demandada al pago de las Costas.

Corolario de lo expuesto en los acápites anteriores, esta Sala de Decisión Laboral modificará la Sentencia de Primera Instancia, de la fecha y procedencia conocidos, que en Apelación y Consulta se revisa, en cuanto al valor del retroactivo reconocido, conforme lo explicado, confirmándose en todo lo demás, incluida la condena en costas.

COSTAS:

Se condenará en costas en esta Segunda Instancia, a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, al no haber prosperado el recursos de Apelación; fijándose como agencias en derecho la suma de \$908.526,00 en favor de la parte demandante; lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 365 del Código General del Proceso y el Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Se **MODIFICA** la Sentencia de Primera Instancia, de la fecha y procedencia conocidas, que se revisa en **Apelación** y en el grado jurisdiccional de **Consulta** en favor de **LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-**; en cuanto al valor del retroactivo pensional, el cual queda en la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$245.709.464,00)**, que corresponde al período comprendido entre el 28 de octubre de 2011 y el 31 de diciembre de 2018. A partir del primero (1°) de enero de 2019, la entidad demandada deberá continuar reconociendo una mesada pensional en cuantía no inferior a \$3.089.246,00; lo anterior conforme lo explicado en la parte considerativa de esta Sentencia.

SEGUNDO: SE CONDENA en costas en esta Segunda Instancia a cargo de **LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-** fijándose como agencias en derecho la suma de **NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/L (\$908.526,00)** en favor del demandante **FERNANDO EMILIO GIRALDO ARBOLEDA**; según lo explicado en la parte considerativa.; según lo explicado en la parte considerativa.

TERCERO: Lo resuelto se notifica en **ESTADOS** (electrónicos de que trata el artículo 9° del Decreto Legislativo 806 de 2020); se ordena anexar la liquidación del retroactivo pensional reconocido y se ordena devolver el proceso al Despacho de origen. En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Los Magistrados,



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N° 059 del 12 de abril de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100>